

Sesión de continuidad:
"Colaboración Público-Privada en el despliegue de redes de nueva generación"

Barcelona, 12 de abril de 2011

Expresiones del campo de la sociología como "sociedad de la información", "sociedad del conocimiento" o "sociedad red" se han convertido últimamente en lugares comunes del discurso mediático que ponen de relieve la importancia que, a efectos de progreso socioeconómico, tiene hoy en día el sector de las telecomunicaciones. De ahí, la necesidad de que la colaboración en este ámbito entre las administraciones públicas y las empresas privadas sea lo más fluida y productiva posible, sobre todo ahora que la crisis económica y financiera está obligando a gobiernos de todo el mundo a apretarse el cinturón.



De izquierda a derecha: Xavier Vives, Ángel López, Carles Flamerich y Josep Ventosa

Pues bien, con el doble objetivo de promover la reflexión y de aportar ideas para facilitar esa colaboración, el Centro Sector Público-Sector Privado (SP-SP) del IESE Business School, en colaboración con el departamento de Alumni, organizó el pasado 12 de abril, en la sede de la escuela en Barcelona, una sesión de continuidad bajo el título Colaboración Público-Privada en el despliegue de redes de nueva generación. En ella participaron Carles Flamerich, director general del departamento de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat; Josep

Ventosa, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Abertis Telecom, y Ángel Luis López, Postdoctoral Research Fellow del Centro SP-SP.

Xavier Vives, director académico del SP-SP, dio la bienvenida a los asistentes y, a continuación, resaltó la actualidad del tema de la sesión, pues "en los últimos años se ha podido



observar una tendencia creciente de la presencia del sector público en el despliegue de redes de nueva generación", no sólo en España sino en todo el mundo. Así, Vives puso sobre el tapete algunas cuestiones fundamentales: ¿Por qué aparece el sector público como un actor más en el despliegue de estas redes? ¿Está justificada la intervención pública en un sector teóricamente liberalizado? ¿Qué estrategias están adoptando los diferentes países? ¿Qué impacto pueden tener esas estrategias sobre la economía?

Vives repasó la evolución histórica del sector desde finales de la década de 1970, cuando se produce un replanteamiento generalizado del papel hegemónico del sector público en sectores como el de las telecomunicaciones, que da lugar a lo largo de la década de 1980 a una progresiva disminución del papel del Estado, caracterizada por sucesivos procesos de liberalización y la consiguiente introducción de mecanismos de mercado en importantes segmentos de un sector mayoritariamente considerado hasta entonces como un monopolio natural. Finalmente, en la década de 1990, el sector público deja la construcción de redes en manos del sector privado, asumiendo aquél un papel esencialmente regulador.

Sin embargo, tal y como explica Vives, la llegada de la "sociedad del conocimiento" ha revigorizado la posición del sector público, no sólo porque el conocimiento y la conectividad de banda ancha se han convertido sin duda en herramientas fundamentales del progreso humano, sino también porque constituyen una inversión estratégica de primer orden de la que nadie quiere quedar al margen.

Por último, Vives dio respuesta a la pregunta que formulaba al principio sobre la justificación de la intervención del sector público. Para él, la intervención sí está justificada, tanto por razones estructurales como la equidad social, el fomento de la industria, la recuperación

económica o el impulso de la iniciativa local; cuanto por causas coyunturales como la escasez de crédito y, en consecuencia, la falta de financiación privada.

Ángel Luís López apeló a la colaboración público-privada, en la medida en que ésta implica que ambos sectores "compartan el riesgo inherente a la construcción de infraestructuras de nueva generación, haciendo frente así a la escasez de fondos tanto públicos como privados". A tal respecto, López presentó una serie de ejemplos de intervención pública en diferentes países, clasificándolos en función de si la intervención es 100% pública, o bien compartida con el sector privado, o se limita a la concesión de ayudas o subvenciones a la iniciativa privada.

López ilustró, mediante sendos casos representativos, su análisis de las tres posibilidades de intervención pública en cuanto al despliegue de infraestructuras de banda ancha. Por ejemplo, Australia, país con una banda ancha en la media de los países de la OCDE –"caso parecido al de España", según López– donde, "en los próximos ocho años, se invertirán alrededor de 30.000 millones de dólares para llevar fibra óptica hasta el hogar o el edificio al 90% de la población, mientras que el 10% restante se cubrirá con *wireless* con velocidades de hasta 12 megas". Esa infraestructura, cuya construcción correrá a cargo de una empresa con un 51% de propiedad pública, será de titularidad pública durante los primeros cinco años, y después será privatizada. "Se espera que la construcción de esa infraestructura genere alrededor de 30.000 puestos de trabajo directos", lo cual demuestra la importancia de este tipo de proyectos en términos de creación de empleo y recuperación económica.



López lamentó, en cualquier caso, que la penetración de fibra óptica en España sea tan escasa en comparación con la media de la OCDE, si bien señaló la existencia de una serie de iniciativas que invitan a la esperanza, tales como la "Red Asturcón", en Asturias, o la "Xarxa Oberta", en Cataluña.

Asimismo, explicó en detalle las directrices de la Comisión Europea en orden a las diferentes posibilidades de intervención del sector público en el sector de las telecomunicaciones, entre las que, por ejemplo, se cuentan la implementación de medidas administrativas/regulatorias

de fomento del uso de las infraestructuras ya existentes, o la concesión de ayudas estatales para la construcción de redes de banda ancha, ya sean de propiedad pública o privada.

Josep Ventosa apuntó que, en Europa, "estamos ante la necesidad de construir una serie de infraestructuras, sobre todo de fibra óptica, que requieren de una financiación inmensa". Por



otra parte, Ventosa constató que "estamos inmersos en el paradigma de la competencia en infraestructuras, a consecuencia del modelo desregulatorio que impera en Europa, lo cual tiene ventajas y desventajas, pero en todo caso debería existir un equilibrio entre la voluntad de que exista competencia y la factibilidad económica de ello", equilibrio que, según él, "depende en buena medida de la compartición de infraestructuras".

Se estima que para desarrollar esas infraestructuras -esa red de banda ancha de fibra- en Europa serían necesarios cerca de 300.000 millones de euros. "Para ello, la administración debe ejercer el liderazgo en el sector y, en colaboración con el sector privado, trazar la hoja de ruta que permita acometer las necesarias innovaciones".

Por último, Ventosa insistió en la necesidad de establecer, en aras de la sostenibilidad del sector de las telecomunicaciones, de una vez por todas qué servicios deben ser considerados como Servicios de Interés Económico General (SIEG) en España, pues "de ello depende en gran medida el flujo de fondos europeos hacia unos sectores u otros", y lamentó que mientras las redes de telecomunicaciones sigan sin gozar de esa condición -de la que sí disponen, por ejemplo, en Francia- el sector se verá privado de una importante fuente de financiación.

Carles Flamerich, director general del departamento de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Cataluña, señaló que "lo realmente importante ahora es sentar las condiciones de esa colaboración, partiendo de la base de que debemos replantearnos nuestro modelo de telecomunicaciones, asumiendo que la inversión debe ser sobre todo privada".



Flamerich trazó una radiografía de la situación del modelo catalán de telecomunicaciones, esencialmente extrapolable al modelo español. En calidad de representante de la Generalitat –y, por extensión, del sector público–, Flamerich hizo un ejercicio de autocrítica al afirmar que “hasta hoy hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y ahora no tenemos los mil millones de euros necesarios para hacer una red neutral pública que permita operar a todos los operadores y llevar todos los servicios –relacionados con las TIC, se entiende– a todos los rincones de Cataluña”. Flamerich ponderó la importancia de las TIC: “En los últimos diez años, EE.UU. ha aumentado su competitividad en un 50% gracias a las TIC; Europa, en un 20%; España, en un 3%; Cataluña, por su parte, ha perdido un 2% de competitividad en la última década”.

No obstante, Flamerich no se limitó a señalar las debilidades de nuestro modelo, sino que apeló a la implicación de todos los actores en la necesaria reconversión de éste, en el bien entendido de que, en este particular, los objetivos del sector público deben ser: primero, el ahorro; segundo, no entrar en competencia con el sector privado y, tercero, servir de centro armonizador de los esfuerzos del sector privado para llevar el ancho de banda a todo el territorio.



Asistentes a la sesión de continuidad

Por último, Xavier Vives, tras insistir, por un lado, en la importancia de contar con una buena conexión de banda ancha con vistas al progreso socioeconómico de cualquier país y, por otro, en la necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre el sector público y el sector privado en aras de la eficiencia y la equidad, clausuró la sesión agradeciendo a los asistentes su presencia.